Mandato del Relator Especial sobre los derechos de los indígenas

REFERENCE: AL Indigenous (2001-8)
PER 2/2011

4 de julio de 2011

Excelencia,

Tengo el honor de dirigirme a Usted en mi calidad de Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con la resolución 15/14 del Consejo de Derechos Humanos.

En este sentido, quisiera llamar la atención de su Gobierno a la información recibida sobre los hechos de violencia que ocurrieron el 24 de junio del año corriente durante **protestas realizadas en la ciudad de Juliaca**, departamento de Puno. Según la información recibida estos hechos se enmarcan en el contexto de una huelga mantenida desde el mes de mayo por miembros del pueblo indígena aymara exigiendo la suspensión de varios proyectos mineros y petroleros en Puno. Según la información, los hechos de violencia se produjeron después que miembros de la policía despejaron a manifestantes indígenas que habrían ocupado el aeropuerto de la ciudad lo que resultó en un total de 5 personas muertas y más de 30 heridos. A la luz de estas protestas, el Gobierno acordó derogar uno de los decretos que permitía actividades mineras en la región así como otros decretos para la suspensión de la aprobación de solicitudes de concesiones mineras en Puno y para requerir procesos de consulta previa con los pueblos indígenas.

Dada la gravedad de los hechos violentos ocurridos en el contexto de conflictividad social generada por actividades de industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas en esa región del país, es mi intención emitir el comunicado de prensa adjuntado, expresando mi preocupación sobre esta situación y señalando la importancia de mantener el diálogo entre representantes del Gobierno y los representantes indígenas para resolver los asuntos de fondo que motivaron las protestas así como de esclarecer, investigar y sancionar a las personas responsables de las muertes de las seis personas durante los sucesos del pasado 24 de junio.

A la vez, estoy transmitiendo las siguientes alegaciones para intentar esclarecer los hechos llevados a mi atención, con el objetivo de establecer un diálogo constructivo con su Gobierno con respecto a esta situación.

Según la información recibida:

El 9 de mayo de 2011 en la localidad de Desaguadero, Puno, se inició una huelga por parte de miembros de comunidades del pueblo indígena aymara de la región de Puno exigiendo el cese de actividades mineras y petroleras en la región, y en particular exigiendo la suspensión del proyecto minero Santa Ana concesionado a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company. Entre las medidas de presión tomadas por los manifestantes a lo largo del mes de mayo y junio figuraban el bloqueo del Puente Internacional de Desaguadero, el bloqueo de sitios públicos y carreteras en la ciudades de Puno, Ayaviri-Melgar y Juliaca. Durante ese mismo período de tiempo se realizaron una serie de negociaciones entre los dirigentes aymaras y representantes del Gobierno, en particular del Ministerio de Energía y Minas y la presidenta del Consejo de Ministros para tratar sobre el tema minero en la región de Puno.

La protesta que ocurrió en la localidad de Zuliaca el 24 de junio fue realizada por miles de pobladores indígenas quechua provenientes de la provincia de Azángaro que llegaron en días anteriores a Zuliaca exigiendo al Gobierno que tome medidas para descontaminar la cuenca del río Ramis que ha sido afectada supuestamente por actividades de minería artesanal que se había realizado en esa zona. Cuando miles de manifestantes ingresaron a las instalaciones del aeropuerto internacional Manco Capac de Juliaca y prendieron fuego a vehículos y pastizales, se suscitó un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. La policía respondió mediante el uso de armas de fuego, lo que resultó en cinco personas muertas y más de 30 personas heridas.

Estos hechos habrían resultado en una sensación de desasosiego en los habitantes debido a actos de vandalismo que se dieron sobre la conmoción que hubiera causado la represión policial entre los manifestantes y la población en general. También existía preocupación por la capacidad de los centros médicos de la ciudad en atender a las personas heridas a raíz de los sucesos violentos del 24 de junio pasado. Según la información, las actividades de protesta en Puno cesaron el día 27 de junio debido en gran parte a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los dirigentes indígenas.

A pesar de los hechos de violencia que ocurrieron, las mesas de negociación entre el Gobierno y los dirigentes indígenas conformadas con anterioridad resultaron en acuerdos formales para resolver la situación conflictiva en torno a la actividad minera en la región de Puno. Entre las medidas tomadas por el Gobierno se incluye la publicación de dos resoluciones supremas (Resolución Suprema 161-2011 y 162-2011) relacionadas con el funcionamiento de comisiones multisectoriales encargadas de atender asuntos relacionados con las concesiones mineras en las provincias de Chucuito, Yunguyo y Melgar en el departamento de Puno.

Se informa que el Gobierno también emitió el Decreto Supremo 032-2011-EM que derogó un anterior decreto que otorgaba la concesión minera a favor del

proyecto minero de Santa Ana, ubicada en los distritos de Huacullani y Kelluyo, en la provincia de Chucuito, Puno. Igualmente, se emitió el Decreto Supremo 033-2011-EM que dispone la suspensión de petitorios o solicitudes para concesiones mineras en el departamento de Puno y el Decreto Supremo 03420110-EM que dispone sobre la obligatoriedad de la consulta previa con los pueblos indígenas en relación con las actividades mineras y petroleras en Puno.

Además, también se publicó el Decreto Supremo 035-EM que dispone sobre la limpieza de las cuencas de los ríos Ramis y Suches y prohíbe actividades de minería informal y artesanal en las provincias de San Antonio de Putina, Sandia, Carabaya y Huancané.

Excelencia, quisiera solicitar respetuosamente una respuesta de su Gobierno en relación con la información contenida en esta comunicación. Me interesa conocer la opinión de su Gobierno en cuanto a la veracidad de esta información y cualquier otra información que estime relevante. En particular, quisiera saber sobre las medidas que tomará su Gobierno para esclarecer los hechos de violencia que ocurrieron el día 24 de junio en Juliaca y sancionar a los responsables de las muertes de las cinco personas fallecidas.

Igualmente, quisiera conocer más detalles sobre las resoluciones supremas y los decretos aprobados a la luz de las negociaciones entre su Gobierno y los dirigentes indígenas aymaras. En particular, me interesaría saber sobre el proceso de seguimiento que se dará para cumplir con esas medidas y en general sobre los pasos que se tomarán para solucionar los conflictos relacionados con las actividades mineras y petroleras en los territorios indígenas de la región de Puno así como cualquier impacto social, cultural y ambiental que ya se haya generado, como denunciado por los dirigentes indígenas de Azángaro.

Como es del conocimiento de su Excelencia, el tema de la reglamentación de la consulta y de la necesidad de resolver los conflictos sociales que surgen a raíz de actividades extractivas en territorios indígenas en el Perú han sido de especial preocupación tal como se reflejó en mi informe *Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú, 2009* (A/HRC/12/34/Add.8) y en mi declaración pública del 7 de julio de 2010 sobre la Ley del derecho a la consulta previa los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo, aprobada por el Congreso de la República del Perú. Por lo tanto, le agradecería por cualquier información que pudiera brindar en relación con el proceso de aprobación y el contenido del Reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas para las actividades mineras y energéticas a las cuales se ha hecho referencia anteriormente.

Agradecería recibir una respuesta de su Gobierno a estas preguntas antes de 30 días. Garantizo que la respuesta de su Gobierno será debidamente tomada en cuenta en mi

evaluación de la situación y reflejada en el informe que presente al Consejo de Derechos Humanos para su estudio.

Acepte, Excelencia, la expresión de mi más distinguida consideración.

James Anaya
Relator Especial sobre los derechos de los indígenas